



CONSEJO DE SEGURIDAD

ACTAS OFICIALES

SEGUNDO AÑO

167^a.

SESION • 25 DE JULIO DE 1947

NUEVA YORK

No. 64

INDICE

167a. sesión

	<i>Página</i>
248. Orden del día provisional	1
249. Aprobación del orden del día	1
250. Continuación del debate sobre la cuestión de Grecia	1

NOTA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

Los documentos del Consejo de Seguridad (Símbolo S/...) se publican normalmente en suplementos trimestrales de las *Actas Oficiales*. La fecha del documento indica el suplemento en que aparece o en que se da información sobre él.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad, numeradas según un sistema que se adoptó en 1964, se publican en volúmenes anuales de *Resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad*. El nuevo sistema, que se empezó a aplicar con efecto retroactivo a las resoluciones aprobadas antes del 1 de enero de 1965, entró plenamente en vigor en esa fecha.

Documento

El documento relativo a la sesión centésima sexagésima séptima aparece publicado en el suplemento que a continuación se indica:

Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Segundo Año, Suplemento Especial No. 2

Informe presentado al Consejo de Seguridad por la Comisión Investigadora de los incidentes ocurridos en las fronteras de Grecia (documento S/360)

Celebrada en Lake Success, Nueva York,
el viernes 25 de julio de 1947 a las 10.30 horas

Presidente: Sr. O. LANGE (Polonia).

Presentes: Los representantes de los países siguientes: Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, China, Estados Unidos de América, Francia, Polonia, Reino Unido, Siria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

248. Orden del día provisional (documento S/437)

1. Aprobación del orden del día.
2. La cuestión griega: informe presentado al Consejo de Seguridad por la Comisión Investigadora de los incidentes ocurridos en las fronteras de Grecia (S/360)^{1/}.

249. Aprobación del orden del día

Se aprueba el orden del día.

250. Continuación del debate sobre la cuestión de Grecia

Por invitación del Presidente, el Coronel Kerenshi, representante de Albania; el Sr. Mevorah, representante de Bulgaria; el Sr. Dendramis, representante de Grecia; y el Sr. Vilfan, representante de Yugoslavia, toman asiento a la mesa del Consejo.

El PRESIDENTE (traducido del inglés): Estamos discutiendo el preámbulo y el inciso a) del párrafo 3 de la resolución presentada por los Estados Unidos de América^{2/} y tal vez los miembros del Consejo deseen presentar algunas enmiendas.

Sr. MUNIZ (Brasil) (traducido del inglés): Quisiera hacer algunas observaciones respecto de la declaración hecha en la centésima sexagésima sexta sesión por el representante de Yugoslavia^{3/}. En esa sesión el representante de Yugoslavia, y en una sesión previa el representante de Bulgaria, se quejaron de que los miembros del Consejo de Seguridad habían dejado sin respuesta los argumentos que repetidamente se han presentado contra el procedimiento que se sigue en esta discusión. Su queja, que equivale casi a una acusación por denegación de justicia, puede resumirse en la forma siguiente: el Consejo de Seguridad trata de aplicar e imponer una solución de una controversia con arreglo al Capítulo VI de la Carta, que no admite la imposición de soluciones.

Estoy de acuerdo en que el Capítulo VI de la Carta no permite la aplicación de medidas coercitivas. También estoy de acuerdo en que el Capítulo VI concede gran importancia a la soberanía de los

Estados. Pero de estas premisas no puede concluirse que el Capítulo VI no imponga obligaciones a los Estados. El Artículo 34 no autoriza al Consejo de Seguridad a hacer investigaciones y la facultad de hacer investigaciones impone a los Estados la obligación de colaborar con la Comisión Investigadora. Pero el Capítulo VI va aún más lejos. Una vez que el Consejo de Seguridad decida, con arreglo al Artículo 34, que una controversia o una situación pueden poner en peligro la paz, impone a las partes la obligación de arreglar la controversia. Para ello pueden valerse de sus propios métodos, pero están obligadas a solucionar la controversia. Su falta de cumplimiento obliga al Consejo de Seguridad a ir aún más lejos y aplicar el Capítulo VII.

Por consiguiente, no podemos hacer una declaración general en el sentido de que el Capítulo VI no impone obligaciones y deberse a los Estados. Es verdad, como dije antes, que el Capítulo VI concede importancia a la soberanía de los Estados. Es verdad que el Capítulo VI es algo inadecuado. Pero si eliminamos todas las obligaciones comprendidas en el Capítulo VI el resultado sería su anulación, lo que conduciría al Consejo de Seguridad a la inmediata aplicación del Artículo VII. Esto sería contrario al método indicado en la propia Carta que establece dos fases en el procedimiento para prevenir conflictos: la fase de la solución pacífica y la fase de la imposición de medidas coercitivas. Los representantes de Yugoslavia y Bulgaria se equivocan cuando sostienen que el procedimiento que ahora seguimos aquí es una medida coercitiva tomada con arreglo al Capítulo VII.

Estamos todavía en la etapa de la conciliación de conformidad con el Capítulo VI y espero que nos mantengamos en esta etapa. Lo que aquí tratamos de hacer es formular meras recomendaciones. Con respecto a la resolución presentada por los Estados Unidos de América que ahora discutimos, la comisión que se instituiría sería una comisión de conciliación y, con arreglo al Artículo 34, estaría facultada para hacer investigaciones como medidas previas para llegar a una conciliación. Por consiguiente, la única obligación impuesta a los Estados interesados, según el proyecto de resolución, sería la de colaborar con la Comisión en sus funciones de investigación.

El Consejo de Seguridad no es una Corte de Justicia; tampoco es un cuerpo legislativo. El Consejo de Seguridad es un órgano compuesto de representantes de naciones soberanas, que se reúnen con el objeto

^{1/} Véanse las Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Segundo Año, Suplemento Especial No. 2.

^{2/} Véanse las Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Segundo Año, No. 51, 147a. sesión.

^{3/} Ibid., Segundo Año, No. 63.

de buscar motivos de acuerdo suficientes para permitir que se tomen medidas en favor de la paz y de la seguridad. Por consiguiente, espero que el Consejo de Seguridad en este caso pueda encontrar suficientes motivos de acuerdo que permitan llevar la paz y la concordia a esos países que tan trágicamente fueron devastados por la guerra.

En la centésima sexagésima sexta sesión, el Dr. López hizo con este objeto un emocionante llamamiento. Deseo manifestar que participo de sus sentimientos. Puedo asegurar a los representantes de los Estados que participan en esta discusión que cualquier comisión que el Consejo de Seguridad juzgue de su deber enviar a sus países, esa comisión hará todos sus esfuerzos para armonizar y pacificar las relaciones entre esos países y respetará sus derechos soberanos.

Sr. MEVORAH (Bulgaria) (traducido del francés): No tenía la intención de tomar la palabra ahora, pero ayer, un señor muy simpático me hizo por tercera vez una pregunta. Me dijo: "¿Por qué no quieren Vds. la Comisión? Esto prueba que su conciencia no está completamente tranquila". He reflexionado y creo que en verdad debo una respuesta al Consejo de Seguridad. ¿Cómo explicarlo? Ustedes podrían suponer que nuestra conciencia está completamente tranquila y sin embargo comprender fácilmente por qué no queremos la comisión. No sé cómo explicar esto que me parece tan simple. No deseo abusar del tiempo de Vds. contando historias. No me resolvería a hacerlo si no hubiera encontrado en las propias actas de la Comisión Investigadora, a propósito de lo que pasó en Bulkes, una pequeña historia contada, si no me equivoco, por el Sr. Vianna, quien entonces presidía la Comisión. El nos ha contado la historia de una pequeña liebre que atravesaba corriendo el territorio de Ucrania y que después de dos noches y dos días de carrera llegó a una región del Cáucaso. Estaba completamente sofocada. Se le preguntó por qué tenía tanto miedo. Respondió: "¿Usted no sabe? Hay un ucace del zar. Todos los camellos deben ser castrados." Se le dijo: "Pero usted no es un camello, mi pobre liebre." "Ciertamente — respondió —; ¡pero vaya usted a probarles que yo no soy un camello!"

Traslademos esta historia, que me parece muy sugerente, al plano que nos interesa. Una comisión, es algo muy grave. Supone un organismo compuesto de numerosas personas, que exige muchos automóviles, muchos chóferes, que causa muchas molestias; un organismo que atrae muchos corresponsales y suscita muchas divergencias. Ya sabemos lo que es una comisión. Decíamos aquí francamente que de ellas estamos hartos. Es necesario que se nos deje tranquilos porque tenemos problemas que resolver. Tenemos actualmente numerosas preocupaciones. Estamos preocupados sobre todo por los problemas de orden económico que pesan sobre nuestro país a consecuencia de la guerra y también de los dos años de sequía que nos han empobrecido.

Sin embargo, supongamos que Vds. deciden instituir una comisión: esta comisión iría a nuestro país y lo recorrería; recorrería nuestras fronteras; sus agentes, según lo que he leído en las proposiciones, tendrían el derecho de deslizarse en todos los

territorios sin que se pueda impedirles el acceso; esto suscitaría evidentemente complicaciones y divergencias; se citarían testigos para que comparezcan ante la Comisión; estos testigos darían informaciones; sus testimonios deberían ser sometidos a un examen a fin de determinar si se apoyan en la verdad o si, como se ha dicho, han sido "cocinados"; habría acusaciones y réplicas; en definitiva, toda una política de gran envergadura se haría por intermedio de esta comisión, y sobre todo se haría en nuestro propio suelo. Después de todo, tal vez sería una cosa excelente tener una comisión: ¡Esto podría darnos la ocasión de probar que las cosas son como en realidad son!

Les digo francamente que es muy difícil llegar a la verdad por este medio. No tendría el coraje de decirlo, si no hubiese sido expresado ese mismo pensamiento con mayor elocuencia por uno de los oradores precedentes. En efecto, el representante de Francia dijo que toda la documentación recogida con tanta dificultad y bullicio, viajes y gastos había resultado al fin de cuentas inútil o más bien ineficaz para dar un cuadro de la realidad. Y las razones de tal estado de cosas se suponen, se conocen: la tarea de tal comisión es verdaderamente una tarea difícil.

Si se tratase de una comisión que iría a pasar poco tiempo entre nosotros, en Grecia y en Yugoslavia, tendría cierta utilidad: tendría la ocasión de conocer nuestros países mientras que por nuestra parte tendríamos la ocasión de darnos a conocer. Pero se trata de una comisión que va a instalarse en nuestros países y que será como un huésped al cual se ha invitado con buena voluntad pero al cual se le quisiera decir, al fin, que eso dura ya demasiado. La comisión está prevista para dos años y se considera la posibilidad de prolongar eventualmente su mandato. Es claro que en eso hay algo que pesará sobre nuestra vida diaria, como pesa esta Comisión interaliada que hemos tenido y que tenemos todavía y a la cual nos encontramos un poco subordinados, puesto que esta Comisión nos ha sido impuesta por ley y nos vemos obligados, por ley, a dirigirnos a ella para muchas cosas y hasta para pequeños asuntos.

Si se tratase de una necesidad evidente habríamos dicho: esto es muy desagradable pero debemos aceptarlo. Pero no creo que haya una necesidad.

En primer lugar se trata de hacer una investigación. Ahora bien, se procede a una investigación sobre un hecho consumado: si sucede algo se hace una investigación para conocer la verdad. Pero instituir una comisión para investigar hechos que pueden producirse, o que se producirán en el futuro, esto sobrepasa la lógica normal; ya no se trata desde ese momento de una comisión investigadora. Y si a esta comisión se le conceden facultades muy amplias, en particular el derecho de poner en ejecución sus decisiones sobre ciertos asuntos, es claro que estaremos verdaderamente bajo tutela. Por ejemplo deberemos dar a esta Comisión una lista de los refugiados; y nunca estará satisfecha, y nos reclamará listas complementarias. Se establecerá una correspondencia voluminosa al respecto. Tal vez podremos pensar que no deben comunicarse a la comisión los nombres de estos refugiados

porque de la comisión a las autoridades administrativas griegas hay sólo un paso: esto podría ocasionar perjuicios a las familias de estos refugiados que han encontrado asilo en nuestro territorio. Esta cuestión ha sido debatida ante la Comisión Investigadora y creo que se han dado razones muy plausibles y aceptables. Podría citar además otros ejemplos pero tendré la ocasión de tratar de nuevo este punto cuando se discutan los párrafos siguientes; por ahora me contentaré con esto.

Por supuesto, se nos dice: "Les ofrecemos nuestros buenos oficios", pero se agrega: "Pensamos que aceptarán". Se trata de una "recomendación", pero se nos dice: "Si no los aceptan entonces deduciremos las conclusiones." Se trata pues, que en realidad de una recomendación que se impone y que debe ser aceptada y que quien tenga la audacia de no aceptarla correría el peligro de ver que su negativa sea interpretada de una manera muy desagradable.

Ustedes ven, pues, que esas son medidas que tienen fuerza coercitiva y que al final de cuentas esta comisión reviste un carácter obligatorio y que nos será impuesta. Tal vez nuestro país es pequeño, pero aun los países pequeños tienen sus susceptibilidades y quisiéramos ser completamente libres. Por esto protestamos contra el establecimiento de la comisión. Quisiera ampliar mis reflexiones sobre este punto, deteniéndome en los detalles, pero creo que aún no ha llegado el momento y me reservo el derecho de hablar ulteriormente sobre esta cuestión.

Ahora trataré de un segundo punto. Si se busca el verdadero sentido de la Carta se comprueba que establece, permítaseme la palabra, una "graduación", que va de lo más pequeño a lo más grande, de las medidas benignas al empleo de la fuerza. Pero esta graduación está en relación con la gravedad de los hechos, es decir que depende del grado de responsabilidad. Para hablar con toda claridad, diré que no se condena a pena de muerte a un desventurado que se ha robado un pan. Es preciso que haya cometido un crimen grave que amenace a la sociedad, para merecer esta sanción. Esto es importante, y es por ello que siempre me he preocupado de este punto desde el principio de los debates. Cuando se quiere aplicar una sanción es preciso medir esta sanción según el grado de importancia de la falta y el peligro que podría de ella derivarse.

Así, pues, es imperioso determinar lo que hay verdaderamente en el fondo de los asuntos que nos ocupan. Habría que investigar el grado de nuestra responsabilidad, cuál es la falta cometida, y si he hablado de denegación de justicia es porque he comprobado que el Consejo de Seguridad no trata de determinar el grado de gravedad de la falta, la responsabilidad efectiva, el peligro existente, sino prejuzgar, por decir así, la situación a fin de justificar la sanción prevista. Mantengo esta afirmación aun después de la declaración del representante del Brasil y declaro formalmente que no ha podido convencerme porque lo que justamente habría podido servir de base para determinar la importancia de las sanciones habría sido un examen a fondo de las acusaciones; y desaffo a quien quiera a que venga a probarme que hemos cometido una falta grave o a decirnos en qué consiste esa falta. Repito

que la responsabilidad que pesa sobre nuestras espaldas no puede merecer sino una sanción correspondiente fundada en el grado de importancia de esta responsabilidad y en el peligro que entraña para la paz.

Si se hubiese hecho tal esfuerzo sin duda alguna se habría comprobado simplemente que "más era el ruido que las nueces". Llegados a esta conclusión, todos los miembros del Consejo no habrían tenido ninguna dificultad en ponerse de acuerdo para hacernos recomendaciones útiles, para decirnos: No declaramos que Vds. hayan cometido falta; no les imputamos ninguna responsabilidad pero les pedimos que pongan orden en sus relaciones; pónganse de acuerdo y concluyan, como les pedimos, un buen tratado; hagan lo necesario para que los incidentes de frontera no se repitan."

Si así hubiese sido, habríamos aceptado y seguido este consejo de buen grado; cada uno se habría puesto a trabajar esforzándose por llegar a un buen resultado. Pero lo que se ha propuesto va mucho más allá de lo que la situación pide.

Antes de terminar debo una respuesta al representante de los Estados Unidos de América quien ha lanzado antes de ayer, contra nuestros tres países, la grave acusación de que no se encuentra allí ninguna traza de libertad ni de democracia. No he retenido de manera precisa los términos que él empleó pero el sentido ha quedado intacto en mi espíritu.

Creo que tal acusación estaba algo fuera de lugar, primero, porque no se relacionaba directamente ni lógicamente a la resolución propuesta. El representante de los Estados Unidos de América ha subrayado que al hacer esta declaración expresaba tanto su opinión como la del representante de su país ante la Comisión Investigadora, aunque esto no tenía nada que ver con los términos de su proposición; además ha agregado que esta opinión no debía ser utilizada como base para la interpretación posible de los términos de la resolución que el Consejo adoptase.

Sin embargo, puesto que la acusación ha sido lanzada, creo que no debo dejarla sin respuesta; por lo tanto, todavía me permitiré decir algunas palabras. Primero y simplemente preguntaré al representante de los Estados Unidos de América cuáles son sus fuentes de información. Yo no pienso, en efecto, que se limite a leer los periódicos y a tomar de ellos sus informaciones; porque en este caso éstas no tendrían, sino una fuente completamente inestable y poco seria.

Con toda sinceridad, no veo cuáles son los hechos verdaderamente graves que pudieran dar la ocasión y la posibilidad de juzgar nuestros países de la manera como han sido juzgados. Si actualmente hubiese en nuestro país antisemitismo, el representante de los Estados Unidos de América hubiera podido concluir que allí, donde hay antisemitismo, no hay democracia. Siuviéramos en nuestro país un problema negro, siuviésemos una legislación particular al respecto, habría podido juzgar a la luz de esta legislación del estado de nuestra democracia. Pero nosotros no tenemos negros. Así, pues, si el representante de los Estados Unidos de América juzga el

grado de democracia que existe en nuestros tres países fundándose únicamente en el hecho de que en tiempos tan difíciles como los que atravesamos, se procede de tiempo en tiempo en nuestro país a arrestar a algún diputado, debo responderle que los periódicos están llenos de hechos de este género que suceden, por ejemplo, en Grecia sin que ello provoque la protesta de los Estados Unidos de América.

Somos una verdadera democracia e insisto en este punto. Vamos sinceramente hacia una democracia cada vez más y más evolucionada y desarrollada. Hacemos todo lo posible para dar a nuestro pueblo lo que necesita. Si en los tiempos difíciles actuales pueden producirse perturbaciones en nuestros países, como en muchos países de Europa, estas perturbaciones son suficientemente explicables a causa de la situación verdaderamente desastrosa que la guerra ha provocado. Pero esta cuestión del grado relativo de democracia es muy vasto y no es este el lugar de discutirla en toda su amplitud y en toda su complejidad.

Sobre un solo punto se puede estar de acuerdo con los representantes que sostienen esta opinión. Si los Estados no cumplen las recomendaciones hechas con arreglo al Capítulo VI, deben asumir la responsabilidad moral. En ello todos estamos de acuerdo: los Estados que no cumplan estas recomendaciones soportarán la responsabilidad moral y política; pero esto es otro asunto.

Expreso esta opinión porque las proposiciones contenidas en la resolución presentada por los Estados Unidos de América y que se reflejan en las enmiendas presentadas por Francia no encuentran justificación ni en la Carta ni en la situación de hecho que existe en Grecia y en la Grecia Septentrional.

Tales son las pocas observaciones que deseaba agregar a mis otras declaraciones.

Sr. GROMYKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducido de la versión francesa del texto ruso): He hablado ya de las enmiendas francesas a la resolución de los Estados Unidos de América sobre la cuestión de Grecia y he expresado un juicio de orden general al respecto. Por ello no repetiré lo que ya dije en cuanto al fondo de estas enmiendas. Deseo hacer algunas observaciones complementarias sobre una cuestión que necesita algunas aclaraciones. Se trata de lo siguiente: ¿Cuál es el alcance de las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad relativas al arreglo pacífico de controversias, con arreglo al Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas?

Vemos que los representantes de ciertos países tratan de probarnos que las decisiones tomadas de conformidad con el Capítulo VI de la Carta, o al menos algunas de ellas, tienen la misma fuerza que las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VII. Esta interpretación no es correcta ni conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

En efecto ¿cómo se puede pretender que las decisiones tomadas por el Consejo en materia de solución pacífica de controversias tengan un carácter obligatorio, cuando el Capítulo VI de la Carta dice expresamente que el Consejo de Seguridad hace reco-

mendaciones con arreglo a este Capítulo? Esta es una tesis que no se puede demostrar.

En cumplimiento de los poderes y funciones que se le han señalado, el Consejo de Seguridad tiene que examinar las controversias y las situaciones y tomar decisiones según su gravedad. Si clasificamos las situaciones y las controversias según su gravedad, habrá que aplicar primero medidas iniciales, incluso las investigaciones; después, recomendaciones para la solución pacífica de las controversias, y por último, las medidas que el Consejo de Seguridad deberá tomar si comprueba la existencia de una amenaza contra la paz, de un quebrantamiento de la paz o de un acto de agresión.

Es claro que la decisión del Consejo de Seguridad de proceder a una investigación pertenece a la categoría de las medidas iniciales destinadas a la solución pacífica de las controversias, en cambio que las decisiones que el Consejo de Seguridad debe tomar en virtud del Capítulo VII de la Carta se aplican a las controversias y a las situaciones que pueden constituir o que constituyen una amenaza contra la paz.

Notemos además que no todas las decisiones tomadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta son obligatorias. Se sabe que el Artículo 39 de la Carta (Capítulo VII) estipula que el Consejo de Seguridad puede hacer recomendaciones a los Estados, aun conforme al Capítulo VII. La diferencia esencial entre el Capítulo VII y el Capítulo VI es precisamente que las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad con arreglo al Capítulo VI sólo son recomendaciones.

¿Qué sucedería si adoptáramos la tesis que sostiene aquí el representante de los Estados Unidos de América? Llegaríamos inevitablemente a concluir que las decisiones que tome el Consejo de Seguridad tienen fuerza obligatoria, tanto para las medidas últimas tomadas cuando hay amenaza contra la paz o quebrantamiento de la paz, como para las medidas iniciales de investigación. ¿Hace falta demostrar que tal concepto es contrario al espíritu y a la letra de la Carta de las Naciones Unidas? La interpretación según la cual las decisiones del Consejo de Seguridad en materia de investigación tienen fuerza obligatoria es contraria al Capítulo VI de la Carta.

En apoyo de sus argumentos el representante de los Estados Unidos de América, Sr. Johnson, se ha referido a la conferencia de San Francisco y a la de Dumbarton Oaks. Debo decir que al hacerlo el representante de los Estados Unidos de América no me ha convencido y no ha logrado confirmar los argumentos que había presentado. Si ha llegado a probar algo es justamente lo contrario de lo que quería demostrar. En cuanto a la conferencia de Dumbarton Oaks, en la cual tomé parte desde la primera sesión hasta la última, debo decir que nadie expresó allí la menor duda en cuanto al carácter que convenía atribuir a las decisiones tomadas por el Consejo con arreglo al Capítulo VI relativo a la solución pacífica de las controversias.

Ninguna divergencia de pareceres se manifestó al respecto. Las delegaciones de los Estados Unidos de América, del Reino Unido y de la Unión de Repú-

blicas Socialistas Soviéticas tenían al respecto una sola y única opinión, a saber, que las decisiones tomadas con arreglo al Capítulo VI deben ser recomendaciones. Durante nuestras reuniones en la conferencia de Dumbarton Oaks la delegación de los Estados Unidos de América tomó notas de una manera regular y es fácil, para quienes lo deseen, conocer la posición que la delegación de los Estados Unidos de América tomó al respecto durante esta conferencia. Las otras delegaciones también tomaron notas. Los pareceres de las tres delegaciones son pues conocidos de cada uno de estos tres Gobiernos que tomaron parte en esta conferencia.

En cuanto a la conferencia de San Francisco, es preciso decir que allí también todos se pusieron de acuerdo para declarar que las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad con arreglo al Capítulo VI son recomendaciones. La delegación de los Estados Unidos de América no objetó esta interpretación; tampoco la delegación del Reino Unido; y la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también estuvo de acuerdo.

Recordaré que la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sostuvo en la conferencia de San Francisco que la Carta debía dar al Consejo de Seguridad poderes y funciones que estuviesen de acuerdo con las responsabilidades que le incumben en lo que concierne al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no ha tratado de limitar los poderes y las funciones del Consejo de Seguridad. Si en la conferencia de San Francisco hubieron tentativas de este género fueron debidas a las delegaciones de otros países. Finalmente, la Carta fue aprobada, como se sabe, y se le dieron al Consejo poderes y funciones adecuados.

Existen asimismo las actas de las sesiones de esta Conferencia, que cualquiera puede consultar. Se posee también los informes de las diferentes Comisiones. Supongo que todos estos documentos se encuentran en poder de la Secretaría de las Naciones Unidas y los interesados pueden consultarlos si desean conocer los pareceres expresados por las diferentes delegaciones ante la conferencia de San Francisco y estar seguros del carácter que atribuyen a las decisiones del Consejo de Seguridad con arreglo a los Capítulos VI y VII de la Carta.

Recordaré que la delegación de los Estados Unidos de América en su informe dirigido al Secretario de Estado en junio de 1945, y citado por el representante de Yugoslavia, indicó al Secretario de Estado su opinión sobre las decisiones tomadas con arreglo al Capítulo VI. La actitud oficial de la delegación de los Estados Unidos de América se expresa por el pasaje siguiente de ese informe: "Con respecto a la solución pacífica de controversias el Consejo sólo tiene poder para hacer recomendaciones."

Se puede decir que la delegación de los Estados Unidos de América que presentó ese informe era diferente de la que representa a ese país ante las Naciones Unidas. Pero debemos considerar, sin embargo, que la delegación de los Estados Unidos de América expresaba entonces el parecer

oficial de su Gobierno. No se puede admitir que el Gobierno de los Estados Unidos de América haya tenido una opinión en 1945 y otra en 1947.

A veces se pretende que este es un asunto de interpretación: unos pueden atenerse a tal interpretación y otros a tal otra. No es así. No es un asunto de interpretación. Cualquiera que sea la interpretación, debemos seguir la Carta y actuar al tenor de sus disposiciones. Ninguna interpretación sea de uno de los miembros del Consejo o de cinco de los once miembros del Consejo, puede modificar la Carta.

Mientras la Carta exista en la forma en que fue aprobada en la Conferencia y ratificada por los Estados, debemos seguirla y no tratar de desviar su significado a nuestro antojo por medio de interpretaciones; no debemos adoptar en 1947 una actitud diferente de la que adoptamos en 1945. Si seguimos esta línea de conducta no tendremos base sólida para nuestros trabajos en el Consejo y nos será difícil trabajar en condiciones normales.

Si nos permitimos por medio de interpretación modificar una disposición clara y neta de la Carta ¿qué diríamos si los otros órganos de las Naciones Unidas hacen lo mismo? Si el Consejo de Seguridad da tal ejemplo en su trabajo, podría ser seguido por los otros órganos.

Por tal motivo la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no puede compartir los pareceres expresados por algunos representantes, según los cuales las decisiones relativas al arreglo pacífico de controversias (con arreglo al Capítulo VI de la Carta) tienen un carácter obligatorio. Si seguimos este camino llegaremos necesariamente a la conclusión siguiente: si un Estado no cumple tal o cual recomendación habrá que aplicarle automáticamente otras medidas. Se preguntará ¿cuáles medidas? Sin duda, medidas coercitivas. Pero en este caso todo el Capítulo VI de la Carta relativo a la solución pacífica de las controversias perdería su razón de ser. Sería preciso entonces conservar sólo el Capítulo VII de la Carta que provee la adopción de decisiones que tienen fuerza obligatoria. Este concepto conduciría a esta conclusión absurda.

Podemos estar de acuerdo en un punto con los partidarios de este concepto; podemos estar de acuerdo en que los Estados tendrán igualmente una responsabilidad moral en el caso en que no cumplan las decisiones del Consejo, es decir las recomendaciones del Consejo en materia de solución pacífica de controversias. Nadie lo negará; pero esto es otro asunto.

Sr. VAN LANGENHOVE (Bélgica) (traducido del francés): El debate sobre los deberes del Consejo de Seguridad con arreglo al Capítulo VI ha asumido ciertas proporciones. Se han introducido en él algunos elementos que pueden, según creo, hacer un poco confusa la cuestión.

Ayer, el representante de Yugoslavia sostuvo, si no me equivoco, que la resolución sometida a nuestra consideración sancionaría una intervención en asuntos que son de competencia interna al tenor del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. Me sorprende que pueda invocarse este argumento cuando

se trata de una controversia en que las relaciones de los Estados interesados son de tal naturaleza que pueden originar violaciones de frontera. El representante de Yugoslavia parece que tiene menos razón para objetar el que la controversia es asunto de competencia del Consejo de Seguridad, puesto que no ha presentado ninguna excepción de incompetencia cuando el Consejo comenzó el examen del asunto.

Por otra parte, el representante de Yugoslavia no nos ha dicho si la observación que ha hecho al respecto, se aplica igualmente a la proposición del representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas según la cual el Consejo de Seguridad decidiría instituir una comisión especial que garantizaría, por medio de una fiscalización adecuada, que la ayuda económica para Grecia se utilice únicamente en interés del pueblo griego.

Con respecto a los poderes de investigación de la comisión cuya creación propone la delegación de los Estados Unidos de América, yo no veo la posibilidad de objetar la competencia del Consejo al respecto. En efecto, si el Consejo de Seguridad no gozase del poder general de investigar y de seguir la situación en lo referente a un caso que le ha sido presentado, no podría cumplir su misión, que es la de velar por el mantenimiento de la paz. Esta misión supone necesariamente el poder de obtener información, sin el cual el Consejo no podría tener en cuenta la evolución de una controversia a fin de determinar la intervención que le corresponde.

Poner en duda el poder general que tiene el Consejo de Seguridad para investigar cuando una controversia lo requiera, equivaldría no sólo a negarle el poder de procurarse las informaciones necesarias para la resolución de los asuntos de su competencia sino, también, a negarle la posibilidad de determinar el grado de esta competencia en un momento dado. Tal interpretación de la Carta no podría indudablemente mantenerse porque terminaría por despojar a la Carta de su eficacia e impedir el funcionamiento de los organismos que instituye.

Sr. PARODI (Francia) (traducido del francés): Desearía comprender exactamente la exposición que acaba de hacer el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta exposición me ha parecido muy clara salvo en un punto que quisiera pedirle que tenga la bondad de aclarar: se trata del Artículo 3 del Capítulo VI, que prevé el poder de investigación del Consejo de Seguridad.

Quisiera preguntar al representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si considera que este Artículo da al Consejo de Seguridad únicamente el poder de recomendar una investigación o si cree que este Artículo le da el poder de decidir que se haga una investigación.

Sr. JOHNSON (Estados Unidos de América) (traducido del inglés): Quisiera hacer un breve comentario a ciertos aspectos de la declaración hecha por el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quisiera también decir que escucharé con interés cualquier respuesta que quisiera dar a la pregunta que acaba de hacerle el representante de Francia.

Ya he manifestado la opinión de mi delegación con respecto a la interpretación que conviene dar al Capítulo VI. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dice que no se trata de una cuestión de interpretación, sino de una disposición de la Carta. Yo no puedo ir tan lejos al usar esta expresión como, según lo ha dicho el Sr. Gromyko, parece que ha ido la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Me parece necesario repetir una observación que hice en la centésima sexagésima sexta sesión, a saber, que el Consejo al interpretar el Capítulo VI, debe considerarlo a la luz de otras partes de la Carta. Es perfectamente exacto que el Capítulo VI es el Capítulo que trata de la solución pacífica de las controversias. Sin embargo, si el Consejo debe desempeñar el papel de conciliador y también el de guardián de la paz debe tener ciertos poderes para tomar medidas. De otra manera no podría actuar; no podría hacer nada. Estos poderes, en mi opinión, le han sido dados en el Artículo 34. Si la situación es tal que el Consejo estima que debe tener más informes antes de poder hacer recomendaciones a los Estados interesados, recomendaciones previstas en el Artículo 33 y en otros artículos del Capítulo VI, entonces el Artículo 34 en virtud de los poderes que confiere a este Consejo, se encuentra separado y distinto de los otros artículos del Capítulo VI. En mi opinión difícilmente puede discutirse que el Consejo tiene el poder de hacer investigaciones y que, con arreglo al Artículo 29 de la Carta, tiene el poder de establecer órganos auxiliares para realizar tales investigaciones, si el propio Consejo no puede materialmente realizarlas.

Resta únicamente determinar en qué medida y en qué grado los Miembros de las Naciones Unidas están obligados a cooperar a tal investigación con arreglo al Capítulo VI. Creo que esta obligación ha sido impuesta por el Artículo 25. No pienso que se pueda negar que de conformidad con el Capítulo VI es posible tomar decisiones de cierta naturaleza; y que en virtud del Artículo 25 los Miembros de las Naciones Unidas tienen el deber de someterse a estas decisiones.

Comprendo que no he dicho nada nuevo y que debe ser fatigoso para el Consejo oír que se repiten estos argumentos. Sin embargo, tengo el agrado de decir que muchos de los representantes presentes en esta mesa han admitido conmigo que si aceptamos la tesis presentada por la primera vez en la centésima sexagésima sexta sesión por el representante de Yugoslavia, esto equivaldría a anular completamente todo el poder de actuar que el Capítulo VI confiere al Consejo de Seguridad.

Creo que nuestra interpretación está bien fundada. Repito que no creo que confiere a la comisión que sería creada ningún poder para actuar por medio de sanciones en ninguno de los países. Confiere únicamente el derecho de establecer ciertos hechos bajo ciertas condiciones que deben establecerse, e informar esos hechos al Consejo de Seguridad para que actúe de conformidad.

Más aún, si alguno de los países interesados viola el Artículo 25 o cualquier otro artículo de la Carta en relación con este arreglo, y si algo hubiera

de hacerse al respecto, el Consejo de Seguridad debería tomar medidas positivas. No pretendo que con arreglo a este artículo se puedan aplicar sanciones. Sin embargo, él expone a los Estados que no lo cumplen, a graves imputaciones que pueden ser llevadas ante el Consejo de Seguridad y conocidas por éste: imputaciones por falta de cumplimiento de sus propias obligaciones con arreglo a la Carta, para cooperar con el Consejo de Seguridad en sus decisiones. El Consejo de Seguridad puede tomar decisiones de esta naturaleza conformemente al Capítulo VI.

Sr. GROMYKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducido de la versión francesa del texto ruso): Nadie discute al Consejo de Seguridad el derecho de decidir llevar a cabo una investigación o analizar los hechos relativos a una controversia o a una situación. La Carta ha conferido este derecho al Consejo de Seguridad. Sin embargo, todas las decisiones que tome en virtud del Capítulo VI de la Carta, incluso la decisión de hacer una investigación, tienen el carácter de recomendación para los países a los cuales se dirigen.

Tomemos como ejemplo una situación teórica que no tiene por qué ser necesariamente la cuestión de Grecia. Supongamos que el Consejo de Seguridad haya decidido realizar una investigación que haya instituido con este objeto una comisión o cualquier órgano auxiliar. Esta comisión o este órgano auxiliar efectúa sus trabajos en cumplimiento de la decisión del Consejo. Pero supongamos que uno de los Estados interesados estima que la acción de este órgano auxiliar es incompatible con su soberanía y su independencia. Si estima que las medidas del órgano auxiliar son incompatibles con su soberanía este Estado no está obligado, según la Carta, a cumplir las decisiones del Consejo. ¿Se limita con eso los derechos del Consejo de Seguridad? Sí, ciertamente. Pero tal es el sentido del Capítulo VI de la Carta. Las medidas que el Consejo de Seguridad puede tomar con arreglo al Capítulo VI de la Carta son limitadas. Los poderes del Consejo de Seguridad al respecto son necesariamente limitados. Esta es precisamente la diferencia entre el Capítulo VI y el Capítulo VII.

Como ya lo he dicho, un país que no cumple con las recomendaciones incurre en cierta responsabilidad moral, pero únicamente moral.

Admitamos que un Estado rehúsa sin causa justa cumplir las recomendaciones del Consejo de Seguridad y que al actuar así se conduce erróneamente. Admitamos además que la situación se agrava y que de ello resulta una amenaza para la paz. Para obligar a este país a que cumpla la resolución del Consejo de Seguridad, éste deberá tomar una decisión, diferente de las previstas para la solución pacífica de controversias. En efecto, son las decisiones tomadas con arreglo al Capítulo VII las que tienen carácter obligatorio y no las que se toman con arreglo al Capítulo VI ni, por consecuencia, todas las primeras disposiciones que tienen por objeto hacer una investigación.

En este aspecto los poderes del Consejo de Seguridad son mucho más limitados. Sólo más tarde, a medida que aumenta la gravedad de la controversia o de

la situación, las decisiones del Consejo de Seguridad aumentan en peso e importancia hasta volverse obligatorias al ser tomadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta.

Sr. DENDRAMIS (Grecia) (traducido del francés): Los representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Yugoslavia y de Bulgaria se oponen al establecimiento de una comisión que verifique los hechos e informe al Consejo de la situación real y de lo que pueda acontecer en el Sureste de Europa.

La razón por la cual no desean ver confirmados los hechos por un órgano del Consejo de Seguridad es cada vez más evidente. Es tan obvio que tratan de oscurecer el asunto pretendiendo creer que la Carta niega al Consejo el derecho a conocer la verdad después que se ha comprobado que la paz está en peligro.

En la opinión de la delegación de Grecia, esto carece tan notoriamente de fundamento, que aun quienes están en favor de esta tesis no podrían equivocarse.

La verdad es que el Consejo posee pruebas que demuestran que la paz está amenazada y que sería adecuado aplicar medidas apropiadas con arreglo al Capítulo VII. Sin embargo, en una última tentativa destinada a que las partes interesadas pongan término por un procedimiento voluntario a esta guerra no declarada, la Comisión Investigadora ha propuesto, y el proyecto de resolución de los Estados Unidos de América propone lo mismo, que se eviten las disposiciones obligatorias del Capítulo VII en favor de las medidas de conciliación previstas en el Capítulo VI. El Consejo, sin embargo, debe comprobar si las partes interesadas ponen por propia voluntad término a las actividades que amenazan la paz. Si, como todos lo admiten, el Consejo puede efectuar una investigación para determinar si la paz está en peligro, es cierto que puede hacer una investigación para comprobar si la paz ya no está amenazada. El Consejo puede en realidad proceder a una investigación a fin de determinar si una situación grave ha empeorado. Afirmar lo contrario equivaldría a sostener que los autores de la Carta actuaron de manera irracional.

En este momento el Consejo habría podido proceder de acuerdo con las disposiciones del Capítulo VII. Sin embargo, se ha limitado a escoger la vía de conciliación prevista en el Capítulo VI. Ha decidido hacerlo tomando en cuenta las susceptibilidades de algunas partes interesadas y para darles la ocasión de demostrar voluntariamente la sinceridad de los sentimientos pacíficos que profesan. Sin embargo, estas partes no pueden deducir de este gesto de buena voluntad un argumento jurídico para tratar de hacer ineficaz el derecho del Consejo para determinar si ellas aprovechan la ocasión que se les ha ofrecido en el propio espíritu en que esta oportunidad se les ofrece, o si al contrario la utilizan para ocultar nuevas actividades dirigidas a quebrantar la paz. No puede utilizarse la conciliación para justificar desafíos.

Hemos oído elocuentes discursos en los cuales las Grandes Potencias han conciliado sus diferentes

puntos de vista sobre la cuestión que nos preocupa. Estos discursos no han tenido en cuenta el hecho de que las divergencias entre los puntos de vista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de las otras Grandes Potencias, son divergencias de principio. Los países que están en favor de la institución de una comisión que posea la autoridad real necesaria para proceder a una investigación, están en favor del principio de que las disposiciones de la Carta deben ser respetadas. Tratar de conciliar o de llegar a un compromiso a propósito de este principio sería prestar un mal servicio a las Naciones Unidas y a la causa de la justicia internacional y de la paz.

El respeto a los propósitos y a los principios de las Naciones Unidas es el fundamento mismo de la paz. No hay amenaza contra la paz más grave que la falta de respeto a la autoridad del Consejo de Seguridad y a sus órganos auxiliares, a menos que sea un propio miembro del Consejo el que facilite esta falta de respeto o impida al Consejo ejercer de manera eficaz sus funciones tendientes al restablecimiento de la moral internacional.

El argumento que el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acaba de exponer tiende a demostrar que toda investigación emprendida para establecer los hechos constituiría una medida destinada a poner en práctica las resoluciones del Consejo. Esto no es así. La investigación constituye una parte esencial de las funciones del Consejo; esta función puede ser ejercida directamente por el Consejo o por intermedio de una comisión auxiliar, como se prevé en la resolución de los Estados Unidos de América. Si se aceptase la tesis de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, Albania y Bulgaria, es decir las partes interesadas en el asunto, dispondrían de un veto que ni los miembros permanentes del Consejo poseen, puesto que la Carta rehúsa expresamente el derecho de veto a toda parte en una controversia.

Coronel HODGSON (Australia) (traducido del inglés): Mi delegación pensó que este asunto ya había sido resuelto. En verdad yo pensaba, con cierta humildad, que había pronunciado un discurso concluyente con respecto a este asunto. Pensaba que otros representantes habían pronunciado también muy buenos discursos, pero según parece no fueron convincentes. El solo hecho de que este asunto fuera repentinamente introducido de nuevo en la centésima sexagésima sexta sesión me parece una maniobra obstruccionista.

Como este argumento nunca ha sido presentado antes en el Consejo de Seguridad en esta forma y sobre tales bases quisiera saber si la actitud de algunos países respecto al grupo auxiliar se funda en el principio que ahora se defiende. Si ello es así la cosa es muy grave.

Quisiera decir que yo también estuve presente en la Conferencia de San Francisco que el Sr. Gromyko mencionó tanto esta mañana. El Sr. Gromyko dijo, y estoy de acuerdo con él, que no es un asunto de interpretación sino una disposición de la Carta. En seguida citó una interpretación dada por la delegación de los Estados Unidos de América.

Ahora voy a citar la Carta; mi delegación se atiene a la Carta. En ninguna parte la Carta dice, y desaffo a quienquiera a que me demuestre lo contrario, que el Consejo no puede tomar decisiones con arreglo al Capítulo VI. Por otra parte el Artículo 27 se refiere expresamente a "decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI". Vuelvo al Artículo 25 y pido al representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que fijó su atención en este texto: "Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta". Además el Artículo 25 no establece ninguna diferencia entre decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI o del Capítulo VII. Por otra parte tenemos el hecho preciso de que la Carta se refiere "a las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI" y en ninguna parte de la Carta estipula que el Consejo puede hacer únicamente recomendaciones.

No quiero repetir todos los argumentos presentados respecto a este asunto, pero es muy claro que tenemos el derecho y aun el deber de tomar varias decisiones de conformidad con el Capítulo VI. Con arreglo al Artículo 29, al establecer órganos auxiliares, el Consejo de Seguridad toma decisiones. No se trata de ninguna manera de decisiones relativas a formular recomendaciones. Tenemos que tomar decisiones sobre toda clase de cuestiones. Además, en virtud del Artículo 25 todas estas decisiones son obligatorias sin tomar en cuenta si quebrantan o menoscaban la soberanía de algún Estado.

Sr. VILFAN (Yugoslavia) (traducido del francés): No tengo la intención de dedicarme a "filibuster", como creo que se dice en inglés. Podría tener esta intención si creyese que los Miembros del Consejo han decidido ya sus conclusiones. Pero no tengo tal opinión y por ello me esforzaré simplemente, una vez más, para convencer al Consejo.

Cuando se trata de descubrir el sentido exacto del Artículo 34 de la Carta me parece que se olvida que contiene una doble cuestión. Se trata primero de saber cuál debe ser el carácter de una investigación ordenada por el Consejo de Seguridad. ¿Tiene o no tiene esta investigación un carácter obligatorio para los países interesados? Creo que el Sr. Gromyko ha agotado el asunto cuando ha dicho que con respecto a los países interesados se trata de recomendaciones y que hay una decisión únicamente pro foro interno, para uso del Consejo.

Se trata en seguida de determinar el carácter del procedimiento de esta investigación. Al respecto quisiera referirme a lo que dijo el representante de Siria. Este subrayó expresamente que el único objeto de la investigación, según el Artículo 34 de la Carta, es determinar si la prolongación de la controversia o de la situación parece amenazar al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Así, pues, aun si se admite que la investigación, según el Artículo 34, tiene un carácter obligatorio para los países interesados — posito sed non concessio — aun en este caso, digo, es claro que el derecho de investigación no dura sino hasta el momento en que el Consejo de Seguridad toma una decisión.

Cuando se analiza este aspecto de la cuestión se debe tomar en cuenta que el procedimiento definido en el Capítulo VI prevé tres fases: la primera es la investigación; la segunda es la comprobación que permite decidir si la prolongación de la controversia o de la situación puede amenazar al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales; la tercera comprende las recomendaciones.

Creo que cuando se discute un problema de este género no hay que perder de vista este segundo aspecto de la cuestión que acabo de subrayar, a saber, el carácter del procedimiento de la investigación del Consejo de Seguridad.

Paso ahora a otra cuestión. Estos últimos días se nos ha preguntado con frecuencia: "Si se niega al Consejo de Seguridad el derecho de conducir una investigación obligatoria para los países interesados ¿qué sucedería?" y se nos ha respondido: "La Carta será invalidada."

Podría decir a mi vez: "Me sorprende esta pregunta porque lo mismo sería para todas las recomendaciones hechas en virtud del Capítulo VI de la Carta."

Si todas las medidas tomadas con arreglo al Capítulo VI son simplemente recomendaciones, un hecho en el cual todos están de acuerdo, entonces, según el razonamiento citado, la Carta no tiene sentido, la Carta no tiene fuerza. No; debemos limitarnos a comprobar que en el Capítulo VI se han previsto recomendaciones y que estas recomendaciones no son obligatorias.

Son las únicas observaciones jurídicas que deseo hacer. Pero debo también responder al representante de Grecia.

¡Admiro la audacia del representante de Grecia! Si yo conociera la terminología jurídica francesa emplearía esta terminología, porque no quisiera dar la impresión de que mis palabras van más allá de mi pensamiento. Pero infortunadamente mi francés es muy pobre y emplearé palabras muy simples para decir lo que quiero.

He acusado al Gobierno griego ante ustedes, señores, de presentar alegaciones falsas; le he acusado de fabricar mentiras. No sólo he formulado las más graves acusaciones contra él sino que he ofrecido al Consejo de Seguridad presentar pruebas en apoyo de lo dicho; he citado el informe de la Comisión, he dado la referencia de mis citas y he analizado los testimonios.

El representante de Grecia no me ha respondido una sola palabra. Creo que el representante de Grecia no está calificado para citar ante mí los hechos comprobados por la Comisión.

Puesto que debo hacer algunas observaciones con respecto a la intervención del representante de Grecia, quiero agregar que estoy profundamente agradecido al Sr. Mevorah por haber recordado un hecho que pasé en silencio hace dos días: ya había tomado la palabra dos veces ese día y no quise volverla a tomar por tercera vez.

Se trata de acusaciones hechas por el representante de los Estados Unidos de América contra mi país y contra los otros dos países balcánicos.

No debemos olvidar que la Comisión que fue a investigar en los Balcanes, y no solamente la minoría sino también la mayoría de esta Comisión, pensó que era de su deber considerar la situación interior griega y no la situación interior yugoslava, búlgara o albanesa.

La propia mayoría de la Comisión opinó que había elementos que debían considerarse en relación con la situación que existía en la frontera septentrional de Grecia.

Si no se han querido tomar en cuenta los hechos que hemos presentado aquí, que por lo menos no se inviertan los papeles y no se nos considere como acusados en este asunto.

En cuanto a la situación interior de nuestros países, quiero que se reflexione en que siempre se ha considerado a Grecia como un país cuya situación interior tiene repercusiones en la situación exterior.

EL PRESIDENTE (traducido del inglés): Nos hemos apartado ligeramente de nuestro objeto para discutir ciertos principios jurídicos de interpretación de la Carta. Pensé que el asunto era suficientemente importante para dar a los representantes una oportunidad para que expresaran sus opiniones.

Me he abstenido de expresar mis propios puntos de vista. Aunque en este asunto tengo opiniones bien definidas, creí prudente dominar la tentación, que a veces ha sido muy fuerte, de expresarlas, en parte a causa de que no quería prolongar la discusión y en parte porque la discusión me parecía en cierto modo académica.

Es evidente que según la Carta hay ciertas medidas que puede tomar el Consejo, que tienen jurídicamente un carácter obligatorio. Hay otras medidas que son recomendaciones. La controversia se refiere a la manera de establecer la diferencia de interpretación. Pero hay un punto que quisiera establecer, y al hacerlo resumo los puntos de vista de todos los miembros del Consejo cualesquiera que sean sus opiniones y no deseo abordar este asunto ahora: cualquiera iniciativa del Consejo que constituya una simple recomendación desprovista jurídicamente de carácter obligatorio, tiene para todos los propósitos prácticos consecuencias que no son muy diferentes de las medidas que jurídicamente tengan carácter obligatorio. Creo que la autoridad política y moral del Consejo y de sus decisiones, cualquiera que sea su carácter jurídico, es tan grande que ningún Estado Miembro rehusará nunca aplicar sus decisiones.

Es esencial que terminemos la semana próxima la discusión del caso que nos ocupa. Como Vds. lo recuerdan nuestro programa prevé el examen de la cuestión de Egipto y del informe del Comité de Estado Mayor. Además el Comité de Trabajo de la Comisión de Armamentos de Tipo Corriente debe reunirse y la mayor parte de los miembros del Consejo de Seguridad son igualmente miembros del Comité de Trabajo. Tenemos también, que discutir la cuestión de la admisión de nuevos Miembros y el informe del Consejo de Seguridad

a la Asamblea General. Todos estos asuntos deben ser solucionados antes del próximo período de sesiones de la Asamblea General que tendrá lugar dentro de poco.

Por todas estas razones propongo que nos reunamos la semana próxima tan a menudo como sea nece-

sario para terminar el asunto que examinamos. Nuestra próxima reunión tendrá lugar el lunes a las 15 horas; tendremos dos sesiones el martes, una en la mañana y otra en la tarde, y durante la semana tantas otras reuniones como sea necesario.

Se levanta la sesión a las 13.35 horas.